CONGRESO DE LA REPÚBLICA
ÁREA DE TRÁMITE Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS
24 MAR. 2023
RECIBIDO
Firma: Hora: 10:20h.

Dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 131/2021-CR, que propone la "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú".

COMISIÓN DE ECONOMÍA, BANCA, FINANZAS E INTELIGENCIA FINANCIERA
PERIODO ANUAL DE SESIONES 2022-2023

Señor Presidente:

Ha sido remitido para dictamen de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera el Proyecto de Ley 131/2021-CR, presentado por el Grupo Parlamentario Acción Popular, a iniciativa del Congresista Juan Carlos Mori Celis, que propone la "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú".

Luego de la exposición y debate en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria de fecha 08 de marzo de 2023 se acordó por mayoría la aprobación del dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 131/2021-CR, que propone la "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú"; con doce (12) votos a favor, de los señores congresistas Rosangella Andrea Barbarán Reyes, Víctor Seferino Flores Ruiz, Jorge Alberto Morante Figari, Tania Estefany Ramírez García, Rosio Torres Salinas, María Grimaneza Acuña Peralta, Noelia Rossvith Herrera Medina, Jorge Carlos Montoya Manrique, Alejandro Enrique Cavero Alva, José Enrique Jerí Oré, Carlos Antonio Anderson Ramírez y Luis Arturo Alegría García en calidad de accesitario de Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu; y diez (10) votos en contra, de los señores congresistas Waldemar José Cerrón Rojas, Ilich Fredy López Ureña, Segundo Toribio Montalvo Cubas, Bernardo Jaime Quito Sarmiento, Juan Carlos Mori Celis, Germán Adolfo Tacuri Valdivia, Betssy Betzabet Chávez Chino, Isabel Cortez Aguirre, Carlos Javier Zeballos Madariaga y Guido Bellido Ugarte.

I. SITUACION PROCESAL DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 131/2021-CR ingresó al Área de Trámite y Digitalización de Documentos el 2 de setiembre de 2021. Ha sido decretado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera como única comisión dictaminadora el 8 de setiembre de 2021.

II. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

El Proyecto de Ley 131/2021-CR tiene por objeto establecer que todas las personas naturales o jurídicas proveedores de bienes y/o servicios con o sin subsidiarias o filiales en el territorio nacional domiciliados en el extranjero, cualquiera sea su

naturaleza, están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú sin excepción alguna. Las empresas domiciliadas en el territorio nacional con subsidiarias o filiales en el extranjero se obligan a fijar su domicilio fiscal en el Perú para obligaciones tributarias.

El texto normativo de la propuesta legislativa se detalla en el siguiente cuadro:

LEY PARA CONSOLIDAR LAS FACULTADES DEL INDECOPI EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR Y DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL	
Artículo 1. Objeto de la Ley	La presente Ley, tiene por objeto establecer que todas las personas naturales o jurídicas proveedores de bienes y/o servicios con o sin subsidiarias o filiales en el territorio nacional domiciliados en el extranjero, cualquiera sea su naturaleza, están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú sin excepción alguna. Las empresas domiciliadas en el territorio nacional con subsidiarias o filiales en el extranjero se obligan a fijar su domicilio fiscal en el Perú para obligaciones tributarias.
Artículo 2. Derogatoria	Deróguese o déjense sin efecto todas las normas que se opongan total o parcialmente a lo dispuesto a la presente ley.
Artículo 3. Vigencia de la Ley	La presente Ley entra a partir del 01 de enero del 2022.

III. MARCO NORMATIVO

3.1 Constitución Política del Perú, artículos 74 y 118.

3.2 Decisión 439 que establece el Marco General de Principios y Normas para la Liberación del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina.

3.3 Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes.

3.4 Decreto Legislativo Nº 816, Decreto Legislativo que aprueba el Código Tributario.

3.5 Decreto Legislativo N° 1053, Decreto Legislativo que aprueba la Ley General de Aduanas.

3.6 Decreto Supremo Nº 179-2004-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta.

3.7 Decreto Supremo Nº 122-94-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

3.8 Decreto Supremo Nº 009-2009-MINCETUR, que dispone la puesta en vigencia y ejecución del "Acuerdo de Promoción Comercial Perú - Estados Unidos".

3.9 Decreto Supremo N° 145-2019-EF, que aprueba los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la norma anti-elusiva general contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario.

3.10 Resolución de Superintendencia N° 210-2004-SUNAT, que aprueba disposiciones reglamentarias del Decreto Legislativo N° 943 que aprobó la Ley del Registro Único de Contribuyentes.

IV. OPINIONES SOLICITADAS

4.1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Mediante Oficio Nº 084-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de setiembre de 2021, se solicitó opinión a la Presidencia del Consejo de Ministros sobre el Proyecto de Ley 131/2021-CR.

4.2 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Mediante Oficio Nº 087-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de setiembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 131/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 1119-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de febrero de 2022, se reiteró opinión al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 131/2021-CR.

Mediante Oficio Nº 1358-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 9 de marzo de 2022, se reiteró opinión por segunda vez al Ministerio de Economía y Finanzas sobre el Proyecto de Ley 131/2021-CR.

4.3 Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT)

Mediante Oficio Nº 090-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de setiembre de 2021, se solicitó opinión a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria sobre el Proyecto de Ley 131/2021-CR.

4.4 Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.)

Mediante Oficio Nº 088-2021-2022-SMMF-CEBFIF-CR de fecha 13 de setiembre de 2021, se solicitó opinión al Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el Proyecto de Ley 131/2021-CR.

V. OPINIONES RECIBIDAS

5.1 Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)

Mediante Oficio Nº 002474-2021-PCM-SG, la Presidencia del Consejo de Ministros adjunta el Informe Nº 001487-2021-PCM-OGAJ mediante el cual la Oficina General de Asesoría Jurídica de la Presidencia del Consejo de Ministros considera que, el Proyecto de Ley131/2021-CR contiene materias que se encuentran dentro del ámbito de competencias del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores y del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; establecidas en el Decreto Legislativo N° 183, Ley Orgánica del Ministerio de Economía y Finanzas, la Ley N° 29357, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, respectivamente, motivo por el cual no corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros emitir opinión.

5.2 Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)

Mediante Oficio N° 182-2022-EF/10.01, el Ministerio de Economía y Finanzas adjunta el Informe N° 0006-2022-EF/61.02 elaborado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos mediante el cual el Ministerio de Economía y Finanzas informa que el marco legal vigente ya dispone la inscripción en el RUC y por consiguiente la obligación de comunicar el domicilio fiscal en los casos de relevancia para la Administración Tributaria a efectos de un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, por lo que el Proyecto resulta improcedente por ser innecesario.

5.3 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)

Mediante Oficio N° 432-2021-MINCETUR/DM, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo remite el Informe N° 0030-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional, en coordinación con la Dirección de Asuntos Multilaterales de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, del Viceministerio de Comercio Exterior, a través del cual, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo considera que el cumplimiento de la obligación de fijar domicilio fiscal, en ningún caso podría implicar la exigencia de contar con la presencia física del proveedor del servicio en el territorio peruano, por cuanto, ello contravendría los compromisos de Acceso a los Mercados y de Presencia Local contenidos en los Acuerdos Comerciales de los que el Perú es Parte.

5.4 Ministerio de Relaciones Exteriores (RR.EE.)

Mediante OF. RE (MIN) N° 3-0-A/119, se adjunta Informe Técnico elaborado por la Dirección General para Asuntos Económicos de la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores considera que *el artículo 6 del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta señala que en caso de contribuyentes no domiciliados en el país, de sus sucursales, agencias o establecimientos permanentes, el impuesto a la renta recae sólo sobre las rentas gravadas de fuente peruana, es decir, las actividades civiles, comerciales, empresariales o de cualquier índole llevadas a cabo en territorio nacional (artículo 9). Aunado a esto, el artículo 7 de la citada Ley considera a las sucursales de personas jurídicas no domiciliadas en el Perú como domiciliadas en el país para los fines del Impuesto a la Renta.*

Asimismo, las sucursales de empresas no domiciliadas en el país son gravadas con el IGV, en calidad de contribuyentes, cuando realicen cualquiera de las operaciones comprendidas dentro del ámbito de aplicación del impuesto como, por ejemplo, la venta en el país de bienes muebles, la prestación o utilización de servicios en el país, la importación de bienes (artículos 1 y 9.1 del Texto Único Ordenado de la Ley del IGV).

Por lo expuesto, no tendría sentido que el artículo 1 del Proyecto de Ley mantenga la expresión "[...] con [...] subsidiarias o filiales en el territorio nacional [...]" porque esas formas de empresa son sujetas a obligaciones tributarias, ya que deben estar constituidas en el Perú. Tampoco ameritaría reemplazar dicha expresión por el término "sucursales" porque éstas también se consideran pasibles de tributación[1].

5.5 Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)

Mediante Carta Nº 283-2021/GG/COMEXPERU, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú indica que el Proyecto de Ley 131/2021-CR, "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú", no cumple con un adecuado análisis de impacto regulatorio y no posee sustento basado en evidencia que lo justifique. En consecuencia, considera que no debería ser aprobado y enviado al archivo.

5.6 Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP)

Mediante Carta CONFIEP PRE-289/2021, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas indica que el Proyecto de Ley 131/2021-CR, "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú", no modifica el régimen actual del Impuesto a la Renta establecido y resultaría innecesario, pues si nos encontráramos ante un establecimiento permanente, sucursal o agencia, estos están obligados a inscribirse en el RUC al ser considerados contribuyentes domiciliados por sus rentas de fuente peruana. En los demás casos, no es necesaria la inscripción.

5.7 Cámara de Comercio de Lima (CCL)

[1] OF. RE (MIN) N° 3-0-A/119 p. 6.

Mediante Carta P/ 246.10.2021/GL, la Cámara de Comercio de Lima indica que el Proyecto de Ley 131/2021-CR, "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú", no contiene sustento jurídico adecuado ni suficiente para que indiscriminadamente, todos los proveedores domiciliados en el exterior deban automáticamente contar con un domicilio fiscal en el Perú. Así, la Ley del Impuesto a la Renta ya prevé un exitoso tratamiento tributario a sujetos no domiciliados en el país junto con los cuatro numerales anteriores que específicamente establecen en qué supuestos se genera un establecimiento permanente en el país, siendo que la consecuencia es que se encuentren sometidos a las mismas obligaciones tributarias que las empresas locales, tales como: la generación de domicilio fiscal a efectos de recibir las notificaciones correspondientes, la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), llevar libros contables para registrar operaciones de ingresos y gastos, presentar declaraciones juradas mensuales y anuales ante la autoridad tributaria (SUNAT), emitir comprobantes de pago de acuerdo a la legislación peruana, entre otras.

5.8 Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú)

Mediante Carta GG-496-21, la Cámara de Comercio Americana del Perú indica que el Proyecto de Ley 131/2021-CR, "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú", *transgrede tratados internacionales suscritos por el Estado peruano, entre ellos, el Tratado de Libre Comercio entre Perú y Estados Unidos, puesto en vigencia y ejecución desde el 1 de febrero de 2009 mediante el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINCETUR*[2].

5.9 Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI)

Mediante Carta de fecha 4 de octubre de 2021, la Asociación Latinoamericana de Internet indica que el Proyecto de Ley 131/2021-CR, "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú", contraviene los Convenios de Doble Imposición (CDIs), puesto que modificaría la distribución de competencias tributarias que los estados han pactado a través de dichos instrumentos internacionales. Adicionalmente, generaría efectos económicos perjudiciales para el Perú, puesto que los CDIs son instrumentos internacionales que permiten atraer la inversión extranjera y fortalecen la competitividad del Estado. La aprobación de este proyecto, sería un obstáculo y desincentivo para el ingreso de capital extranjero, tan necesario en épocas de reactivación económica.

[2] GG-496-21 p. 4.

VI. ANALISIS DE LA PROPUESTA

6.1 Las empresas no domiciliadas cuentan con un régimen de tributación en el ordenamiento jurídico peruano

Según lo indicado en la exposición de motivos del proyecto de ley, las empresas no domiciliadas en el Perú "no pagan tributos", siendo la finalidad de esta iniciativa generar el marco legal necesario para el cumplimiento de la obligación tributaria. Al respecto, cabe destacar que el ordenamiento jurídico peruano sí prevé disposiciones con esta finalidad. En este sentido, el artículo 6° del T.U.O. de la Ley del Impuesto a la Renta (en adelante, LIR) establece que los contribuyentes no domiciliados en el país, sucursales, agencias, establecimientos permanentes, sociedades, entre otras entidades constituidas en el exterior, están sujetos al impuesto a la renta por las rentas gravadas de fuente peruana. Asimismo, el artículo 76° de la LIR señala que las entidades que paguen o acrediten rentas de fuente peruana a beneficiarios no domiciliados deben realizar las retenciones a favor del fisco que correspondan.

Adicionalmente, debe considerarse lo establecido en el artículo 14° de la LIR, que establece los supuestos en los que las empresas extranjeras generan un establecimiento permanente en territorio nacional, y que conlleva entre otros efectos jurídicos, la obligación de fijar un domicilio fiscal en sede nacional. Por tanto, habida cuenta que la finalidad del proyecto de ley se encuentra recogida en el marco jurídico vigente, resulta innecesario incluir una norma nueva en este sentido porque traería como consecuencia un supuesto de sobreregulación.

6.2 Del contenido normativo del proyecto de ley

De acuerdo con la Exposición de Motivos del Proyecto, la problemática que se pretende solucionar es el hecho que:

"...las empresas han venido operando sin pagar los impuestos en el Perú con los denominados contratos offshore, registrado en un país en el que no lleva ni desarrolla ninguna actividad empresarial, que radica por lo general en paraísos fiscales, que en la práctica una offshore es una cuestión meramente administrativa y se trata de un instrumento para poner nombre de esas sociedades un patrimonio (*sic*), que suele utilizarse para ocultar el verdadero dueño de la sociedad empresarial, y ha sido utilizado como un mecanismo para cometer presunto fraude fiscal ante la Administración Tributaria, a través de un supuesto esquema que obliga a sus proveedoras (*sic*) a pagar un porcentaje del total que reciben por sus contratos a una empresa vinculada en otros países, que forma parte del conglomerado, y esta estructura les permite evadir el pago de los impuestos que devienen de aquellos cobros, generando graves perjuicios económicos para el

desarrollo del país, sin embargo estas empresas han ostentado inmensas ganancias sin pagar impuestos por la provisión de productos (bienes) y servicios[3]."

Agrega la Exposición de Motivos que la propuesta está relacionada con lo previsto por el Decreto Supremo N° 145-2019-EF, que aprobó los parámetros de fondo y forma para la aplicación de la norma anti - elusiva general contenida en la Norma XVI del Título Preliminar del Código Tributario, que permitiría a la SUNAT fiscalizar las transacciones de grandes empresas en territorios offshore; lo que genera desigualdad de condiciones en el pago de tributos respecto de las empresas que no tienen filiales o subsidiarias en otros países y que realizan actividades económicas con la provisión de bienes o servicios.

Al respecto cabe detallar que, de acuerdo con el Proyecto, las empresas proveedoras de bienes y/o servicios no domiciliados en el país estarían obligadas a establecer un domicilio fiscal en el país, con lo cual únicamente se tendría el dato respecto de tales empresas (que podrían ser las empresas off shore que menciona la Exposición de Motivos), siendo insuficiente el dato del domicilio fiscal en el país para determinar quiénes son los verdaderos propietarios de las empresas ni cuál de las empresas del grupo es la que verdaderamente realiza la actividad económica sustancial.

En efecto, tal como refiere la Exposición de Motivos, el establecer un domicilio fiscal resulta importante para la Administración Tributaria a fin de que pueda dirigir sus notificaciones y lograr poner en conocimiento del contribuyente las decisiones que afectan sus intereses, así como para desplegar sus facultades de fiscalización *in situ* de ser necesario.

En razón a lo señalado, el domicilio fiscal está estrechamente relacionado con el lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio, tratándose de personas jurídicas, tan es así que el sétimo párrafo del artículo 11 del Código Tributario prevé que la Administración Tributaria no puede requerir el cambio de domicilio fiscal cuando el lugar indicado por el contribuyente es aquel en el cual se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio. Por ello, no resultaría útil que cualquier empresa no domiciliada por el solo hecho de prestar servicios o proveer bienes en el país establezca un domicilio fiscal en el territorio nacional.

En efecto, el referido Código Tributario en su artículo 11, establece que los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal conforme esta lo establezca. Asimismo, prevé que el domicilio fiscal fijado por los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria se considera subsistente

[3] Informe Nº 0006-2022-EF/61.02 elaborado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos adjunto mediante Oficio Nº 182-2022-EF/10.01 del Ministerio de Economía y Finanzas. p. 2.

mientras su cambio no sea comunicado a esta, excepto cuando el domicilio declarado corresponda a: i) La residencia habitual, tratándose de personas naturales, ii) El lugar donde se encuentra la dirección o administración efectiva del negocio, tratándose de personas jurídicas y, iii) El de su establecimiento permanente en el país, tratándose de las personas domiciliadas en el extranjero.

Ahora bien, mediante el Decreto Legislativo N° 943, se crea el Registro Único de Contribuyentes (RUC) según el cual deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados o no en el país, que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: i) Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, conforme a las leyes vigentes, ii) Que sin tener la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, tengan derecho a la devolución de impuestos a cargo de esta entidad, en virtud de lo señalado por una ley o norma con rango de ley. Esta obligación debe ser cumplida para proceder a la tramitación de la solicitud de devolución respectiva, iii) Que se acojan a los Regímenes Aduaneros o a los Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción previstos en la Ley General de Aduanas y, iv) Que por los actos u operaciones que realicen, la SUNAT considere necesaria su incorporación al registro.

Cabe detallar que, de acuerdo con el referido Decreto Legislativo, la inscripción en el RUC exige señalar el domicilio fiscal.

Asimismo, conforme con el citado Decreto Legislativo, la Resolución de Superintendencia N° 210-2004-SUNAT, dispone que están obligadas a inscribirse en el RUC las sucursales en el Perú de las Sociedades Extranjeras, o los Establecimientos Permanentes de los no domiciliados; siendo que no están obligados a inscribirse en el RUC, los no domiciliados cuyas rentas están sujetas a retención en la fuente y los no domiciliados a los cuales no se les ha efectuado la retención por cuanto el pagador de la renta es una entidad no domiciliada[4].

En línea con las referidas normas, para efectos del impuesto a la renta, la Ley del Impuesto a la Renta regula en su capítulo II los aspectos relativos a la base jurisdiccional de dicho impuesto. Al respecto, el artículo 7 de la citada ley establece que se consideran domiciliadas, entre otras:

- Las personas naturales de nacionalidad peruana que tengan domicilio en el país, de acuerdo con las normas de derecho común.
- Las personas naturales extranjeras que hayan residido o permanecido en el país más de ciento ochenta y tres (183) días calendario durante un período cualquiera de doce (12) meses.

[4] Ibidem. p. 4.

- Las personas jurídicas constituidas en el país.
- Las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el Perú de empresas unipersonales, sociedades y entidades de cualquier naturaleza constituidas en el exterior, en cuyo caso la condición de domiciliada alcanza a la sucursal, agencia u otro establecimiento permanente, en cuanto a su renta de fuente peruana.

Agrega el citado artículo 7 que las disposiciones sobre domicilio, contenidas en el capítulo II de la Ley del Impuesto a la Renta, no modifican las normas sobre domicilio fiscal contenidas en el Código Tributario.

Así, en atención a lo indicado las sucursales o los establecimientos permanentes de sociedades constituidas en el exterior se encuentran domiciliadas en el país, encontrándose obligados a inscribirse en el RUC (para lo cual se les exige señalar domicilio fiscal), debiendo declarar y pagar el impuesto a la renta por sus rentas de fuente peruana.

Además, el artículo 47 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta señala que la condición de domiciliado es extensiva a las sucursales, agencias u otros establecimientos permanentes en el exterior establecidos por personas domiciliadas en el país.

En el caso de los contribuyentes no domiciliados que generen renta de fuente peruana[5] estos pagan el impuesto a la renta vía retención en fuente, siendo el pagador domiciliado el responsable de realizar la declaración y pago del impuesto[6] como agente de retención. Así, en el supuesto que el pagador omita realizar la citada retención califica como responsable solidario con el contribuyente asegurándose de este modo el cobro del tributo.

En ese sentido, la legislación del impuesto a la renta establece reglas específicas para asegurar el pago del impuesto a la renta, las cuales resultan aplicables conjuntamente con lo señalado en el Código Tributario y la legislación que regula el RUC.

De otro lado, respecto a lo señalado en la Exposición de Motivos referido a que los gigantes de la tecnología digital como las multinacionales no pagan impuestos en el Perú sino en países donde han fijado sus domicilios fiscales, se debe indicar que dicha problemática está siendo discutida por los países miembros del Marco Inclusivo del Plan BEPS de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y proponen reformar las regulaciones fiscales internacionales para que, entre otros, se garantice que las empresas multinacionales paguen un porcentaje sobre el beneficio residual que obtengan de sus operaciones a favor de

[5] Artículos 9 y 10 de la Ley del Impuesto a la Renta.
[6] Inciso c) del artículo 71 y artículo 76 de la Ley del Impuesto a la Renta.

las jurisdicciones de mercado, sin importar donde operen o tengan fijado su domicilio fiscal. Al respecto, el Perú viene participando en dichas reuniones, habiendo firmado en julio de este año, la "Declaración sobre una solución de dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía"[7] y se espera que el trabajo técnico culmine en los próximos meses.

Cabe añadir que la problemática que aborda la Exposición de Motivos no se solucionaría con el simple hecho de declarar un domicilio fiscal en el territorio peruano para aquellas empresas que prestan servicios a personas naturales, puesto que al estar tales empresas ubicadas fuera del país, la Administración Tributaria no estaría en capacidad de realizar fiscalizaciones efectivas en el lugar que se declare como domicilio fiscal en el Perú, dado que la dirección efectiva no estaría en el país y por ende no habría documentación alguna a ser materia de revisión.

Distinto es el caso que plantea la Exposición de Motivos cuando menciona a las empresas off shore que son utilizadas como estructuras legales para atribuir a estas la realización de las operaciones económicas que en realidad son desarrolladas bien por personas naturales o por personas jurídicas establecidas en el país y que ya se encuentran inscritas en el RUC con domicilio fiscal en el país pero que por la forma de hacer sus operaciones logran que el contribuyente se encuentre fuera del ámbito de aplicación de los impuestos correspondientes en el país, para lo cual la Administración Tributaria ya cuenta con una norma anti elusiva general y los parámetros para su aplicación tal como bien señala la Exposición de Motivos y que no requiere cambios legislativos en cuanto a la obligación de declarar un domicilio fiscal en el país[8].

En atención a las normas citadas, el marco legal vigente ya dispone la inscripción en el RUC y por consiguiente la obligación de comunicar el domicilio fiscal en los casos de relevancia para la Administración Tributaria a efectos de un adecuado control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, así como con una norma anti elusiva general y los parámetros para su aplicación; por lo que el Proyecto resulta improcedente por ser innecesario.

6.3 De la contravención a los convenios y tratados comerciales asumidos por el país

Respecto de la compatibilidad del Provecto de Ley con los compromisos comerciales internacionales:

---

[7] https://www.oecd.org/tax/beps/oecd-g20-inclusive-framework-members-joining-statement-on-two-pillar-solution-to-address-tax-challenges-arising-from-digitalisation-july-2021.pdf.

[8] Informe Nº 0006-2022-EF/61.02 elaborado por la Dirección General de Política de Ingresos Públicos adjunto mediante Oficio Nº 182-2022-EF/10.01 del Ministerio de Economía y Finanzas. p. 6.

Nociones sobre el domicilio fiscal

De la lectura del artículo 1 del Proyecto de Ley, se observa que este busca que los proveedores de bienes y servicios (con o sin subsidiarias o filiales en el territorio nacional) que estén domiciliados en el extranjero, se encuentren obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú sin excepción alguna.

Sobre el particular, es preciso traer a colación lo dispuesto en la Norma XI del Título Preliminar del TUO del Código Tributario.

> *"NORMA XI: PERSONAS SOMETIDAS AL CODIGO TRIBUTARIO Y DEMAS NORMAS TRIBUTARIAS*
> *Las personas naturales o jurídicas, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales o extranjeros, domiciliados en el Perú, están sometidos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en este Código y en las leyes y reglamentos tributarios.*
>
> *También están sometidos a dichas normas,* ***las personas naturales o jurídicas****, sociedades conyugales, sucesiones indivisas u otros entes colectivos, nacionales* ***o extranjeros no domiciliados en el Perú, sobre patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributación en el país. Para este efecto, deberán constituir domicilio en el país o nombrar representante con domicilio en él****.*
>
> *(...)."*

Del texto previamente citado, se advierte que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras no domiciliadas en el Perú están sometidos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el TUO del Código Tributario y leyes tributarias específicas, respecto de los **patrimonios, rentas, actos o contratos que están sujetos a tributación en el país**. Para dicho efecto, el referido artículo establece que estos sujetos no domiciliados **deberán constituir domicilio en el país o nombrar representante con domicilio en él**.

En el mismo sentido, el artículo 14 del TUO del Código Tributario regula la presunción de domicilio fiscal de domiciliados en el extranjero (no domiciliados), señalando que regirán las siguientes normas: a) si tienen establecimiento permanente en el país, se aplicarán las disposiciones de los artículos 12 y 13; b) **en los demás casos se presume como su domicilio, sin admitir prueba en contrario el de su representante**.

Por su parte, el artículo 11 del TUO del Código Tributario dispone que "los sujetos obligados a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo a las normas respectivas tienen la obligación de fijar y cambiar su domicilio fiscal, conforme esta

lo establezca. El domicilio fiscal es el lugar fijado dentro del territorio nacional para todo efecto tributario; sin perjuicio de la facultad del sujeto obligado a inscribirse ante la Administración Tributaria de señalar expresamente un domicilio procesal en cada uno de los procedimientos regulados en el Libro Tercero del presente Código con excepción de aquel a que se refiere el numeral 1 del artículo 112 (. ..)".

En concordancia con lo señalado, el artículo 2 del Decreto Legislativo N° 943, Ley del Registro Único de Contribuyentes, prevé lo siguiente:

> *"Artículo 2.- inscripción en el Registro Único de Contribuyentes*
> *Deben inscribirse en el RUC a cargo de la SUNAT, todas las personas naturales o jurídicas, sucesiones indivisas, sociedades de hecho u otros entes colectivos, nacionales o* ***extranjeros, domiciliados o no en el país*** *que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos.*
> *a)* ***Sean contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, conforme a las leyes vigentes****.*
> *b) Que sin tener la condición de contribuyentes y/o responsables de tributos administrados por la SUNAT, tengan derecho a la devolución de impuestos a cargo de esta entidad, en virtud de lo señalado por una ley o norma con rango de ley. Esta obligación debe ser cumplida para proceder a la tramitación de la solicitud de devolución respectiva.*
> *c) Que se acojan a los Regímenes Aduaneros o a los Destinos Aduaneros Especiales o de Excepción previstos en la Ley General de Aduanas.*
> *d) Que por los actos u operaciones que realicen, la SUNAT considere necesaria su incorporación al registro."*

Como se puede apreciar, conforme a las normas tributarias previamente citadas, las personas naturales o jurídicas extranjeras no domiciliadas en el Perú obligadas a inscribirse ante la Administración Tributaria de acuerdo a las normas respectivas, tienen la obligación de fijar su domicilio fiscal, para lo cual deberán constituir domicilio en el país o nombrar un representante.

En ese sentido, la presente iniciativa legislativa al plantear que todas las personas naturales o jurídicas proveedores de bienes y servicios, domiciliados en el extranjero, cualquiera sea su naturaleza, tengan la obligación de fijar domicilio fiscal en el Perú sin excepción alguna, no estaría teniendo en consideración lo que el propio Código Tributario establece, en relación a que las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras no domiciliados en el Perú están sometidos al cumplimiento de las obligaciones establecidas en el TUO del Código Tributario y en las leyes tributarias específicas sobre patrimonios, rentas, actos o contratos siempre que estén sujetos a tributación en el país.

Sobre los compromisos comerciales internacionales vinculados al comercio de servicios

En los acuerdos comerciales de los que el Perú es parte, el Perú ha asumido compromisos de no imponer restricciones al comercio de servicios. Estos compromisos buscan evitar o disminuir las restricciones que existen principalmente en la normativa y que impiden o dificultan el comercio de servicios.

Organización Mundial de Comercio (OMC)

A nivel multilateral, todos los miembros de la OMC, como el Perú, se comprometieron a **evitar la discriminación contra servicios y proveedores de servicios en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS)**[9]. Sujeto a los compromisos específicos de cada país, el AGCS requiere que todos los servicios y suministros de servicios extranjeros se traten de manera no discriminatoria, incluyendo a las materias de impuestos.

Asimismo, respecto de la cláusula de trato nacional parte de los acuerdos constitutivos del sistema de comercio internacional de la OMC, el artículo del XVII AGCS dispone lo siguiente:

> *"**Artículo XVII***
> ***Trato nacional***
> *1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades que en ella puedan consignarse, **cada Miembro otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios de cualquier otro Miembro, con respecto a todas las medidas que afecten al suministro de servicios, un trato no menos favorable que el que dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares**.*
> *2. Todo Miembro podrá cumplir lo prescrito en el párrafo 1 otorgando a los servicios y proveedores de servicios de los demás Miembros un trato formalmente idéntico o formalmente diferente al que dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios similares.*
> *3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si modifica las condiciones de competencia en favor de los servicios o proveedores de servicios del Miembro en comparación con los servicios similares o los proveedores de servicios similares de otro Miembro". (énfasis añadido).*
>
> *Esta obligación de trato nacional exige que **"un Miembro de la OMC brinde a los productos, servicios y proveedores de servicios extranjeros un trato no menos favorable que el trato a productos, servicios y proveedores de servicios nacionales similares. Cuando se aplica la obligación de trato***

[9] En 1995 entró en vigor el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la Organización Mundial de Comercio, que no solo se convirtió en el único acuerdo de negociación de servicios en el ámbito multilateral, sino que se constituyó una referencia para la negociación de servicios a nivel regional y bilateral.

nacional, los productos extranjeros, por ejemplo, una vez que han cruzado la frontera e ingresado al mercado interno, no deben estar sujetos a impuestos o reglamentación menos favorable que los productos nacionales "similares"[10].

Comunidad Andina (CAN)

En el marco de la Nonagésimo cuarto Período Extraordinario de Sesiones de la Comisión de la CAN[11] del 11 de junio de 1998 se adoptó la **Decisión 439** que establece el **"Marco General de Principios y Normas para la Liberación del Comercio de Servicios en la Comunidad Andina"**. La referida Decisión en gran medida se inspira, en lo establecido en el **Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de la OMC**.

Al igual que en el Sistema Multilateral del Comercio, en el marco de la CAN, a través de dicha Decisión, se establecieron como principios para la prestación de los servicios, el **principio de trato nacional** previsto en el artículo 8 que establece que: "Cada País Miembro otorgará a los servicios y a los prestadores de servicios de los demás Países Miembros, un trato no menos favorable que el otorgado a sus propios servicios o prestadores de servicios similares, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 14 del presente Marco General".

Asimismo, en la mayoría de sus acuerdos comerciales, el Perú ha asumido el compromiso de no requerir el establecimiento de un proveedor de servicios en el territorio peruano, como requisito para suministrar sus servicios. Este es el llamado compromiso de "Presencia Local"[12].

Entre los Acuerdos Comerciales que contienen el compromiso de Presencia Local encontramos, entre otros, al Acuerdo de Promoción Comercial Perú - EE. UU., puesto en vigencia y ejecución desde el 1 de febrero de 2009 mediante el Decreto Supremo Nº 009-2009-MINCETUR, en su artículo 11.5 (Presencia Local) del Capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios, dispone lo siguiente:

> *"Artículo 11.5: Presencia Local*
> *Ninguna Parte podrá exigir al proveedor del servicio de otra Parte a establecer o mantener oficinas de representación o cualquier otra forma de empresa, o a ser residente, en su territorio como condición para el suministro transfronterizo de un servicio".*

---

[10] VAN DEN BOSSCHE, Peter. The Law and Policy of the World Trade Organization Text, Cases and Materials. 2017.
[11] La Comisión de la CAN está constituida por un representante plenipotenciario de cada uno de los Gobiernos de los Países Miembros. Es otro de los órganos normativos del Sistema Andino de Integración, cuya capacidad legislativa es expresada en la adopción de Decisiones, especialmente vinculadas con comercio e inversiones.
[12] Informe N° 0030-2021-MINCETUR/VMCE/DGGJCI/DSN, elaborado por la Dirección de Supervisión Normativa de la Dirección General de Gestión Jurídica Comercial Internacional, en coordinación con la Dirección de Asuntos Multilaterales de la Dirección General de Negociaciones Comerciales Internacionales, del Viceministerio de Comercio Exterior adjunto mediante Oficio Nº 432-2021-MINCETUR/DM del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.

Esta disposición también forma parte de otros Acuerdos Comerciales vigentes, como son los acuerdos bilaterales suscritos por el Perú con Chile, México, Canadá, Singapur, Corea del Sur, Japón, Panamá, Costa Rica, Honduras y Australia; así como de acuerdos plurilaterales, tales como el Protocolo Adicional del Acuerdo Marco de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico – CPTPP (Australia, Brunei Darussalam, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam) y el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP). A modo de ejemplo, se cita a continuación el artículo 10.6 del Capítulo de Comercio Transfronterizo de Servicios del CPTPP:

> *"Ninguna Parte exigirá a un proveedor de servicios de otra Parte establecer o mantener una oficina de representación o cualquier forma de empresa, o que sea residente en su territorio, como condición para el suministro transfronterizo de un servicio."*

De esta forma, el compromiso de Presencia Local obliga al Perú de manera expresa a no requerir la presencia de un proveedor de servicios como residente o mediante el establecimiento de una empresa o inclusive la creación de una oficina de representación, como condición para el suministro del servicio.

Finalmente, debemos recordar que los tratados gozan de rango de ley conforme al artículo 200 (4) de la Constitución Política del Perú[13], y que, al respecto, el Tribunal Constitucional ha reconocido este rango legal al señalar que *"los tratados son fuente normativa, no porque se produzcan internamente, sino porque la Constitución así lo dispone"*[14].

En ese sentido, dado que el Proyecto de ley no desarrolla ni sustenta de qué manera se aplicará la obligación de fijar domicilio fiscal en el Perú, a fin de no contravenir nuestros compromisos comerciales internacionales, en caso de aprobarse la iniciativa legislativa, en ningún caso se podría exigir la presencia física de un proveedor del servicio en alguna de las formas previamente mencionadas, por cuanto ello constituiría un incumplimiento del compromiso de Presencia Local.

Por otro lado, los acuerdos comerciales del Perú contienen un compromiso de **"Acceso a los Mercados"**, mediante el cual nuestro país se compromete a no

---

[13] **Constitución Política del Perú**
Artículo 200.- Acciones de Garantía Constitucional
Son garantías constitucionales:
4) La Acción de Inconstitucionalidad, que procede contra las **normas que tienen rango de ley**: leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, **tratados**, reglamentos del Congreso, normas regionales de carácter general y ordenanzas municipales que contravengan la Constitución en la forma o en el fondo.

[14] STC Exp. 00047-2004-AI/TC, fundamentos jurídicos 18 al 22.

imponer contingentes o limitaciones numéricas que limiten el acceso de proveedores de servicios al mercado peruano.

El Perú ha asumido este compromiso, por ejemplo, en el Acuerdo General de Comercio de Servicios (AGCS) celebrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo Comercial Perú — Unión Europea y el Tratado de Libre Comercio Perú — China. A modo de ejemplo se cita el texto contenido en el literal a) del numeral 2 del Artículo XVI del AGCS.

> *"2. En los sectores en que se contraigan compromisos de acceso a los mercados, las medidas que ningún Miembro mantendrá ni adoptará, ya sea sobre la base de una subdivisión regional o de la totalidad de su territorio, a menos que en su Lista se especifique lo contrario, se definen del modo siguiente:*
>
> *a) limitaciones al número de proveedores de servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos de servicios o mediante la exigencia de una prueba de necesidades económicas; (...)."*

Es decir, en el caso del comercio transfronterizo de servicios (sin desplazamiento del proveedor o el consumidor), no podría limitarse el número de proveedores de servicios que provean el servicio desde su país de origen hacia el Perú.

En ese sentido, a fin de no contravenir nuestros compromisos comerciales internacionales, el establecimiento del domicilio fiscal planteado en el Proyecto de Ley en ningún caso podría exigir la presencia física del proveedor en el Perú (al menos mediante el establecimiento de una oficina de representación), debido a que, en la práctica, se estaría imponiendo un límite al número de proveedores extranjeros que podrían brindar el servicio desde su país de origen sin trasladarse al Perú. Por tanto, en ese caso se estaría estableciendo -de facto- una cuota cero de proveedores transfronterizos de servicios hacia el Perú, esto es, ningún proveedor podría brindar servicios de forma transfronteriza sin tener presencia en el país, lo que configuraría un incumplimiento de los compromisos comerciales.

De otro lado, resulta importante señalar que, debido a los avances tecnológicos y el mayor acceso a internet, el comercio transfronterizo de servicios adquiere cada vez mayor relevancia. De esta forma, tanto las personas naturales como jurídicas en el Perú, consumen servicios que se prestan a través de internet por proveedores de servicios que en su mayoría no cuentan con ningún tipo de presencia física en el Perú.

Si bien existen sectores de servicios en los que es posible identificar algunos proveedores específicos (como los servicios de *streaming* o transmisión de programación en línea), son innumerables los proveedores de servicios del exterior que suministran o suministrarán servicios al Perú a través de internet.

6.4 El proyecto en el marco de los lineamientos de la OCDE

En la exposición de motivos, se hace referencia a las empresas que brindan servicios digitales, señalando que deberían ser unas de las entidades a las que correspondería aplicar esta iniciativa legislativa. Al respecto, la OCDE, en cooperación con el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, a través del Kit de Herramientas de IVA Digital para Latinoamérica y el Caribe[15] ha establecido la guía de mejores prácticas para autoridades tributarias en Latinoamérica y el Caribe, con recomendaciones y estándares para la efectiva recaudación del IGV para actividades de e-commerce y servicios digitales.

Teniendo en cuenta que la OCDE recomienda que sus países miembros cuenten con regulación y políticas estándares para cumplir con sus objetivos, la aprobación del proyecto de ley apartaría al Perú de los estándares normativos y acuerdos internacionales sobre tributación, que buscan garantizar las reformas adecuadas para permitir modernizar los mecanismos de recaudación.

Por otro lado, el 2 de julio de 2021, el Perú se adhirió al "Statement on a Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy" (en adelante, la "Declaración")[16], aprobada en el "Marco Inclusivo contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS)" de la OCDE/G20[17]. Dicho programa, además de no obligar a las empresas multinacionales a tener una presencia ni domicilio físico en cada una de las jurisdicciones de los países firmantes, involucra dos pilares fundamentales para llevar a cabo una adecuada reasignación de derechos impositivos, los cuales se encuentran alineados a la dinámica de la economía digital[18].

Esta Declaración permitirá que el 20% al 30% de los beneficios de las empresas multinacionales más rentables que superen cierto margen de beneficios—denominados "beneficios residuales"—, deban ser reasignados a las distintas jurisdicciones donde se encuentren los usuarios y clientes de dichas empresas multinacionales. También prevé medidas para garantizar la prevención y resolución

---

[15] OECD, WBG, CIAT & IDB. VAT Digital Toolkit for Latin America and the Caribbean, Paris, 2021. Disponible en: https://www.oecd.org/tax/consumption/vat-digital-toolkit-for-latin-america-and-the-caribbean.htm.

[16] Embajada del Perú en Francia. 2 de julio de 2021. Comunicado de Adhesión del Perú a la Declaración de miembros del Marco Inclusivo BEPS de la OCDE/G20 en materia fiscal. Disponible en: https://www.gob.pe/institucion/embajada-del-peru-en-francia/noticias/505042-adhesion-del-peru-a-la-declaracion-demiembros- del-marco-inclusivo-beps-de-la-ocde-g20-en-materia-fiscal.

[17] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). 01 de julio de 2021. 130 países y jurisdicciones se integran en un nuevo y ambicioso marco para la reforma fiscal internacional. Disponible en: https://www.oecd.org/centrodemexico/medios/beps-if-impuestos-digitales.htm.

[18] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Julio de 2020. OECD/G20 Base Erosion and Profit Shifting Project Addressing the tax challenges arising from the digitalisation of the economy [Proyecto de Erosión de Base y Traslado de Beneficios Abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía]. Disponible en: https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf.

de disputas ante el riesgo de doble imposición en múltiples jurisdicciones, para lo que se dispone la paralización y retiro de medidas unilaterales de los países suscriptores que sean contrarias a la Declaración, como sucede con los impuestos discrecionales a los servicios digitales o, en este caso, con las disposiciones del presente proyecto de ley.

VII. COSTO-BENEFICIO

Sobre el particular, debemos considerar lo establecido por el Reglamento de la Ley Marco para la Producción y Sistematización Legislativa, Ley Nº 26889, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 007-2022-JUS que establece lo siguiente:

> *"Artículo 9.- Análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la norma*
> *9.1 El análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos es empleado para conocer en términos cuantitativos y/o cualitativos los efectos que tiene una propuesta normativa sobre diversas variables que afectan a los actores, la sociedad y el bienestar general, de tal forma que permite cuantificar los costos y beneficios, o en su defecto posibilita apreciar analíticamente beneficios y costos no cuantificables. No se debe limitar al análisis de materias únicamente patrimoniales y/o presupuestales.*
> *9.2 La necesidad de la norma debe estar debidamente justificada dada la naturaleza de los problemas existentes, los costos y beneficios probables de la aprobación y aplicación de la norma y los mecanismos alternativos que existan para solucionar dichos problemas.*
> *9.3 El análisis de impactos cuantitativos y/o cualitativos de la norma es obligatorio en todos los proyectos normativos, y en particular en aquellas de desarrollo constitucional, leyes orgánicas o de reformas del Estado; así como leyes que incidan en aspectos económicos, financieros, productivos o tributarios; y leyes relacionadas con política social y ambiental.*

La aprobación del proyecto de ley conlleva la contravención de los Convenios de Doble Imposición (CDIs), puesto que modificaría la distribución de competencias tributarias que los estados han pactado a través de dichos instrumentos internacionales. Adicionalmente, generaría efectos económicos perjudiciales para el Perú, puesto que los CDIs son instrumentos internacionales que permiten atraer la inversión extranjera y fortalecen la competitividad del Estado[19]. La aprobación de este proyecto sería un obstáculo y desincentivo para el ingreso de capital

[19] VILLAVICENCIO, Daniel. Aspectos relevantes del convenio para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal entre Perú y Brasil En: Convenios para evitar la doble imposición (CDIs). Asociación Fiscal Internacional (IFA) Grupo Peruano. Junio de 2008, pág. 697. Disponible en: https://ifaperu.org/wp-content/uploads/2020/07/330_15_villavicencio-1.pdf

extranjero, tan necesario en épocas de reactivación económica. En consecuencia, el Proyecto de Ley 131/2021-CR se aparta de los lineamientos de la OCDE

VIII. CONCLUSIÓN

Por las consideraciones expuestas, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera recomienda, de conformidad con lo establecido en el literal c) del artículo 70° del Reglamento del Congreso de la República, la **NO APROBACIÓN** del Proyecto de Ley 131/2021-CR y su envío al **ARCHIVO**.

Salvo mejor parecer.
Dése cuenta.
Sala de la Comisión

Lima, 8 de marzo de 202

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MONTOYA MANRIQUE Jorge Carlos FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/03/2023 16:18:38-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: BARBARAN REYES Rosangella Andrea FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/03/2023 15:19:27-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: CAVERO ALVA Alejandro Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 21/03/2023 10:09:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ACUÑA PERALTA Maria Grimaneza FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 16/03/2023 16:57:22-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: FLORES RUIZ Victor Seferino FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 17/03/2023 18:59:37-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: MORANTE FIGARI Jorge Alberto FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/03/2023 09:05:00-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ALEGRIA GARCIA Luis Arturo FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/03/2023 12:00:41-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: JERI ORE Jose Enrique FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/03/2023 18:22:39-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: ANDERSON RAMIREZ Carlos Antonio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 20/03/2023 15:30:02-0500

CONSEJO DIRECTIVO DEL
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, 2 **de** MAYO **de** 2023

Con acuerdo del Consejo Directivo,

pasó al archivo.

HUGO F. ROVIRA ZAGAL
Director General Parlamentario
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 131/2021-CR, que propone la "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú".

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: TORRES SALINAS Rosio FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 22/03/2023 08:31:24-0500

FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por: LOPEZ UREÑA ILICH FREDY FIR 42834886 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 23/03/2023 10:08:14-0500

CONGRESO de la REPÚBLICA

TANIA ESTEFANY RAMÍREZ GARCÍA

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Lima, 22 de marzo de 2023

Oficio Nº 0374-2022-2023-TERG-CR
Sra. Rosangella **BARBARÁN REYES.**
Presidente Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera.
Presente. –

De mi especial consideración.

Por intermedio de la presente lo saludo y mediante la presente hago constar mi voto a favor del dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 131/2021-CR, que propone la "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú".

Lamentablemente, problemas técnicos en la laptop, impiden que pueda firmar el dictamen de manera digital, que se aprobó en la ***DECIMO QUINTA SESIÓN ORDINARIA*** semipresencial, celebrada el 8 de marzo de 2023, en la Comisión de Economía, Banca, Finanzas, e Inteligencia Financiera.

Sin otro particular, quedo de usted.

Cordialmente.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
TANIA ESTEFANY RAMÍREZ GARCÍA

TANIA ESTEFANY RAMÍREZ GARCÍA
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

TERG/rdcch

mp.dictamenes@congreso.gob.pe

De: mesadepartesvirtual@congreso.gob.pe
Enviado el: viernes, 24 de marzo de 2023 09:47
Para: klarco@congreso.gob.pe
Asunto: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
Datos adjuntos: cbf16994d7bb8061a89b0c05f00a1472.pdf; 59049b0d5f39d4f901c205b1190b1a94.pdf

[Solicitante]: klarco@congreso.gob.pe
[Asunto]: Mensaje Usuario Interno - Dictamenes
[Mensaje]: Se adjunta el Dictamen negativo recaído en el Proyecto de Ley 131/2021-CR, que propone la "Ley que establece que los proveedores de bienes y servicios domiciliadas en el extranjero con subsidiarias o filiales en el territorio nacional están obligados a fijar su domicilio fiscal en el Perú. Se indica que la votación aparece en la primera página del dictamen y que se pidió la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos tomados. Asimismo, indicar que la Congresista Noelia Rossvith Herrera Medina voto a favor pero no fue posible conseguir su firma digital. También se adjunta el Oficio N° 374-2022-2023-TERG-CR de la Congresista Tania Estefany Ramírez García, mediante el cual comunica que no pudo firmar digitalmente por problemas técnicos.
[Fecha]: 2023-03-24 09:46:34
[IP]: 192.168.10.219

Su mensaje ha sido recibido.
Por favor, **NO responda a este mensaje**, es un envío automático de una cuenta no supervisada.